

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 1º Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-2685-2021  
CARATULADO : CONSTRUCTORA SAN ALFONSO  
SPA/SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION METROPOLITANO

Santiago, treinta y uno de Julio de dos mil veintitrés

**VISTO:**

**A folio 1**, con fecha 17 de marzo de 2021, y rectificando a **folio 6 del cuaderno de excepciones dilatorias**, comparece **Germán Nicolás Blasquez Galaz**, constructor, representante legal de **CONSTRUCTORA SAN ALFONSO SpA**, del giro de su denominación, representados por **Marco Jiménez Barra**, abogado, todos domiciliados en doctor Sótero del Río N°326, oficina 1002, comuna de Santiago, deduciendo demanda de indemnización del artículo 90 del Decreto Supremo 236 y de cumplimiento forzado con indemnización de perjuicios en procedimiento ordinario, en contra de **SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN METROPOLITANA**, en adelante **SERVIU METROPOLITANO**, servicio público, representada por su directora **Juana Nazal Bustos**, ambos domiciliados en Serrano N°45, Piso 6, comuna de Santiago, con la finalidad



**Foja: 1**

de que: 1) se condene al pago de \$6.893.280 a título de indemnización regulada en el artículo 90 del Decreto Supremo 236, por los aumentos de plazo en la ejecución del contrato de SERVICIO DE HABILITACIÓN DEL SEGUNDO PISO, ALA SUR, EN LAS DEPENDENCIAS DEL SERVIU METROPOLITANO, más intereses corrientes para operaciones reajustables que se devenguen entre la fecha de la mora, o la suma que el tribunal estime; 2) que se declare que la demandada no cumplió íntegra y oportunamente el contrato de suma alzada ya individualizado; 3) que se condene al pago de una indemnización de perjuicios por la suma de \$113.375.123 por concepto de daño emergente, más el interés máximo convencional desde la fecha de la mora, o la suma que este tribunal determine; 4) que se condene a la demandada al pago de una indemnización de \$150.000.000, por concepto de daño moral; 5) que se condene en costas a la parte demandada; y 6) o bien, en todo lo anterior, como el tribunal determine conforme a derecho.

Funda la demanda en que Constructora San Alfonso SpA, se adjudicó el contrato de suma alzada denominado "SERVICIO DE HABILITACIÓN DEL 2° PISO, ALA SUR, EN LAS DEPENDENCIAS DEL SERVIU METROPOLITANO, UBICADO EN SERRANO 45, COMUNA DE



Foja: 1

SANTIAGO.", el cual fue firmado con fecha 23 de diciembre de 2019, iniciando la prestación de servicios el 6 de enero de 2020.

Que el objeto del contrato era el servicio de habilitación post incendio del segundo piso ala sur de las dependencias del SERVIU METROPOLITANO, ubicadas en Serrano N°45, Santiago, reparando y reacondicionando todo el espacio siniestrado.

Refiere que en cuanto al precio y forma de pago, SERVIU METROPOLITANO pagaría por los servicios prestados, de acuerdo a la oferta presentada por el demandante, un monto total máximo de \$306.368.019, debiendo el actor emitir una factura o boleta de honorarios a nombre de SERVIU Metropolitano, identificando el rut, dirección, forma de pago y el ID de la orden de compra, acompañando los antecedentes del proveedor para realizar la transferencia electrónica.

Que el plazo para la realización del servicio sería de 120 días corridos, contados desde la firma del acta de entrega de terreno por parte de la empresa e ITO, considerando los horarios hábiles laborales en que se desarrollan las funciones en el SERVIU Metropolitano, de ser necesario. Indica que



**Foja: 1**

excepcionalmente se podría contemplar prórroga del contrato por una sola vez y por un período igual o menor al contratado, siempre que no fuera causa imputable al proveedor, que se disponga de la partida presupuestaria correspondiente mediante informe fundado del referente técnico del Convenio, expresando las razones técnicas que justificaren la prórroga, debiendo fundamentarlas en necesidades del servicio e interés general.

Refiere que el horario de las obras, era continuado incluyendo sábado y domingo, sin perjuicio de algunas excepciones que indica y señala que las obras se realizaron en forma normal hasta el 18 de marzo de 2020.

Que en dicha fecha, indica, se recibió correo de María Villena González, arquitecta del Equipo de Infraestructuras, solicitando la paralización de las obras, en atención a la pandemia de Covid 19, decretándose la cuarentena de la comuna de Santiago, el 26 de marzo de ese año, instruyendo la paralización de las obras a partir del lunes 22 de ese mes, indicando que *"los costos asociados a la paralización de las obras serán de responsabilidad del Serviu Metropolitano"*.



Foja: 1

Pese a la oposición del demandante, por los costos que generaría, debió paralizar las obras, confiando en que los costos adicionales serían cubiertos por la demandada, según lo indicado en el correo y lo dispuesto en el artículo 8° del contrato celebrado entre las partes.

Señala que el 9 de abril de 2020, remitió un correo electrónico a María Villena, adjuntando el detalle del costo de la mano de obra desde la fecha de paralización hasta el 31 de mayo, enviando luego un nuevo correo que incluía el costo para la empresa de los días de paralización a la fecha efectiva del reinicio de obras, por un valor total de \$48.375.123.

Continúa indicando que el 5 de mayo se le informó que se reanudaban las obras el 7 de mayo, encontrándose la comuna de Santiago en cuarentena, afectada fuertemente por la pandemia, cuarentena que finalizó recién en el mes de octubre de 2020.

Que el 24 de mayo se recibió correo de María Villena, con un documento denominado Prórroga de Contrato, fechado el 17 de abril de 2020, en el cual se ampliaba el plazo del contrato en 70 días corridos contados desde la fecha del término del



Foja: 1

contrato original, presumiendo con esto, la existencia de la partida presupuestaria correspondiente, informándole posteriormente, que los temas asociados a la paralización de la obra se debía canalizar con Luis Flores Garrido, atendido que los costos de la paralización no estaban administrativamente dentro de los términos del contrato original.

Señala que el 06 de julio de 2020, la demandada recibe a satisfacción la obra encargada y que el día 23 de julio, se le remite un correo a Luis Flores Garrido, manifestándole que había problemas con el pago de la mano de obra contratada a la fecha de paralización de las obras, explicando el inconveniente que significaba asumir 45 días de paralización del trabajo, con un costo de remuneraciones que no se tenían consideradas, además del atraso en el pago de compromisos con proveedores y subcontractistas que afectó enormemente la reputación de la Constructora. Que el 27 de julio Luis Flores contesta correo, señalando que de acuerdo a la normativa vigente, no procedía el pago de la mano de obra contratada por todo el período que duró la paralización de obras, con lo cual, no se respetaba el compromiso de asumir dicho costo,



Foja: 1

endosando la responsabilidad económica al demandante, pese a que los trabajos terminaron en la fecha prevista y la obra fue recibida a satisfacción el 6 de julio de 2020.

Que en cuanto a la acción por no pago de gastos generales por los aumentos de plazo, señala que la obra se paralizó por 45 días, teniendo una incidencia de un 37.5% adicional en el plazo general original del contrato, por causas no imputables a la empresa demandante. Refiere que el artículo 90 del Decreto Supremo 236 del Ministerio de Vivienda y Urbanización, otorga derecho al contratista para ser indemnizado en caso de aumentos de plazo debidos a causas no imputables al contratista, aumentos que en el caso de marras, deben ser indemnizados, en un monto equivalente al 0.5 por mil del valor del contrato a suma alzada el que fue de \$306.368.019.-, lo que arroja un valor diario ascendente a \$153.184.-, aplicado a los 45 días hace un total general de \$6.893.280.-; agregando que la ausencia de culpa de la empresa en los aumentos de plazo, son hechos que el propio demandado dejó establecidos en múltiples antecedentes.

Refiere que esta acción no tiene vinculación estricta con la siguiente pretensión, atendido que



**Foja: 1**

el monto que preceptúa el artículo 90 de la norma citada, es muy inferior a los perjuicios efectivamente ocasionados en los 45 días de paralización de las obras, citando al efecto, jurisprudencia de la Corte Suprema.

En cuanto a la acción de cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios, citando los artículos 1438, 1489 y 1545 del Código Civil, que definen el contrato, y el artículo 4 del decreto 75 del Ministerio de Obras Públicas, que define la propuesta a suma alzada, refiere que la doctrina ha definido el contrato a suma alzada, como aquel en que se acuerda la ejecución de una obra dentro de un plazo y por un precio determinado, el que se mantiene invariable, en que el contratista aporta los materiales y el trabajo, asumiendo el riesgo económico del mismo, como contrapartida de tener la administración del contrato, permitiéndole de esta manera el manejo de sus gastos y utilidades. Que de la definición se desprenden tres elementos que dicen relación con: la administración del contrato, el manejo de los gastos y utilidades del mismo.

Indica que este tipo de contrato puede ser considerado contrato oneroso, de conformidad al artículo 1440 del Código Civil, y conmutativo, por





Foja: 1

lo que la paralización de 45 días del contrato, rompió lo oneroso, pues el Serviu obligó al demandante a trabajar y no recibir utilidad alguna, mientras que el demandado recibió a satisfacción las obras convenidas con fecha 6 de julio de 2020, gozando en la actualidad del trabajo desarrollado por la constructora.

Continúa señalando que el contrato a suma alzada, si bien tiene un precio fijo por la ejecución de la obra, puede ser objeto de revisión e incluso de modificación, si las circunstancias bajo las cuales se celebra el contrato, varían; toda vez que siendo un contrato oneroso conmutativo, el contratista debió recibir una utilidad y una contraprestación equivalente a lo que ha otorgado, por lo que sostener 45 días de paralización de las obras, sin pagar los costos, atenta contra la buena fe contractual, más cuando la contraria se comprometió a ese pago.

Refiere al artículo 1489 del Código Civil sobre la opción de solicitar la resolución del contrato o el cumplimiento del mismo, con indemnización de perjuicios, citando los artículos pertinentes relativos a la indemnización, indicando que dado los incumplimientos de la demandada, se debe disponer el



Foja: 1

cumplimiento del contrato y la correspondiente indemnización, correspondiente en cuanto daño emergente, a \$48.375.123, consistente en el gasto adicional que debió cubrir el contratista por los 45 días adicionales de la obra, como costo de mano de obra. Asimismo, a causa de los incumplimientos del demandado, el demandante debió tomar préstamos de dinero a fin de cubrir el déficit que generó el tener que asumir el pago y mantención de esos días adicionales, ascendiendo a la suma de \$65.000.000, por lo que el daño emergente sería de \$113.375.123.

Continúa señalando que en cuanto a la concurrencia de daño moral, el incumplimiento afectó severamente los flujos de ingresos proyectados por el demandante, debiendo realizar esfuerzos para remontar la crisis financiera provocada sin caer en la insolvencia. Citando doctrina y jurisprudencia que define el daño moral y su procedencia, fija este en la suma de \$150.000.000 o la suma mayor que el tribunal determine, más intereses corrientes que correspondan.

**A folio 14,** consta la notificación de la demanda efectuado el 19 de mayo de 2021.

**A folio 19,** la demandada viene en contestar la



Foja: 1

demanda solicitando su rechazo con costas.

Sostiene que por Resolución Exenta N°5970 del 24 de diciembre de 2019, se autorizó y aprobó el contrato suscrito el día anterior con la demandante, para el "Servicio de habilitación del segundo piso, ala sur, en las dependencias del SERVIU Metropolitano, ubicado en Serrano N°45, comuna de Santiago". Señala que el objeto del contrato fue determinado en su cláusula segunda, siendo el reacondicionamiento de todo el espacio siniestrado por el incendio acaecido el día 23 de marzo de 2019. Reconoce el precio referido en la demandada y su forma de pago, así como el plazo de vigencia del contrato y los horarios en que debían realizarse las obras.

Agrega que mediante Resolución Exenta N°1389, del 17 de abril de 2020, se prorrogó el plazo de entrega de los servicios de habilitación, lo que fueron recibidos por medio de acta de recepción de fecha 6 de julio de 2020.

Que respecto a la acción por no pago de gastos generales, en primer lugar, alega la improcedencia de la indemnización por no corresponder a una obra relacionada con el Decreto Supremo N°236/2002.



**Foja: 1**

Señala que el actor yerra en su acción pues los servicios de habilitación por él desarrollados, no se encuentran amparados por la norma referida, pues de los documentos que regularon la relación jurídica con el demandado, quedó de manifiesto que ésta se realizó al amparo de la Ley N°19886/2003 y el Decreto N°240/2004, que autoriza su Reglamento.

Agrega que por medio de la Resolución Exenta N°1327, de fecha 25 de marzo de 2019, se determinó la urgencia, emergencia e imprevisto del siniestro ocurrido en el ala sur de sus dependencias, ordenándose la contratación de una empresa para el servicio de habilitación de dicho lugar, siendo la forma de contratación vía trato directo, según consta en el resuelvo tercero de ese acto administrativo. Misma situación que se replicó en la Resolución Exenta N°5970, que autorizó el trato directo con la demandante, consignándose que dicha contratación se realizaba en el marco de lo dispuesto en la Ley N°19.886 y su Reglamento.

Continúa señalando que posteriormente, por Resolución Exenta N°1389, del 17 de abril de 2020, se prorrogó el plazo de las obras, no indicando que la constructora tendría derecho a percibir suma alguna por dicha ampliación de plazo.



Foja: 1

Por tanto, siendo la regulación jurídica que SERVIU mantuvo con el demandado, ajena al Decreto Supremo en el cual sustenta su acción, solo queda que sea desestimada de plano, con expresa condena en costas.

En segundo lugar, señala que, en el caso en que este tribunal estimara aplicable el estatuto del Decreto Supremo aludido, alega caso fortuito o fuerza mayor, negando las afirmaciones y apreciaciones de hechos que realiza el demandante en su libelo.

Señala que la emergencia sanitaria que se vive en Chile y en el mundo a consecuencia de la pandemia provocada por el Covid 19, obligó a ese Servicio a tomar un sinnúmero de medidas que salvaguardaran la salud de sus funcionarios como de aquellas personas externas que se encontraran desarrollando labores en el edificio institucional. Ante esto, se tomó la determinación de cerrar las instalaciones de SERVIU mientras se desarrollaba de manera urgente un plan de contingencia y se exigía a las empresas que se encontraban trabajando, la presentación de un plan de mitigación de contagios, medida que obedeció única y exclusivamente a una situación nueva, grave, de rápido desarrollo y desconocida en esa época, lo



**Foja: 1**

cual desde el punto de vista jurídico se conoce como caso fortuito o fuerza mayor.

Lo anterior lo refuerza con la lectura de la Resolución Exenta N°1389 del 17 de abril de 2020, que prorrogó el plazo de las obras, cuya fundamentación de dicho acto se basó en la pandemia Covid-19, por lo cual, la causa directa que motivó dicho acto jurídico fue la situación sanitaria que vive el país.

Luego, citando el artículo 45 del Código Civil y la doctrina, desarrolla los elementos del caso fortuito o fuerza mayor, los cuales se cumplen en los hechos, pues atendido que en aquel tiempo no existía mayor información de la forma en que se comportaba el virus, llevó a ese servicio a ejercer un acto de autoridad en miras a la salud de sus funcionarios y de aquellos trabajadores que se encontraban prestando los servicios de habilitación del ala sur de la institución, consistente en suspender cualquier actividad que se estuviera desarrollando en el edificio, lo que significaría *que todos debíamos asumir los costos para mantener la salud personal y pública a resguardo.*

Sostiene que el cierre del edificio se debió a



**Foja: 1**

una situación ajena a la voluntad del SERVIU, y que el hecho de que se decretara cuarenta para la comuna de Santiago sólo 3 días después ratifica que la decisión fue acertada y que posiblemente salvó la vida de varias personas.

Añade que en casos ocasionados por la pandemia miles de personas o empresas han debido soportar cargas públicas, es decir, formas contribución de los individuos a la supervivencia y cumplimiento de los fines de la organización política, que pueden implicar un sacrificio de su patrimonio o libertad.

Invoca seguidamente el Dictamen el N° 10.086 y el Oficio N° E33656 de la Contraloría General de la República, ambos de 2020, que reconocen como fuerza mayor la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

Alega que la acción indemnizatoria es improcedente, por haber sido mal interpuesta. Cita el artículo 1489 del Código Civil, que establece la condición resolutoria tácita, y añade que dicha acción requiere que el contrato exista.

Observa que el actor señala en el punto 15 del libelo que los trabajos se terminaron y la obra fue recibida a satisfacción del Serviu el 06 de julio de



Foja: 1

2020, por lo que a la fecha de la interposición de la demandada el contrato se encontraba terminado, no existía ninguna relación jurídica entre las partes y, por lo tanto, la acción carece de oportunidad.

Respecto de los perjuicios, sostiene que su indemnización es un derecho subsidiario, dada la literalidad del artículo 1489 del Código Civil, el que requiere para su procedencia que el Tribunal declare la existencia de un incumplimiento que deba ser resarcido, pues el contrato fue cumplido por ambas partes.

Señala que, quizás, el actor debió accionar invocando la *autonomía de la acción indemnizatoria del artículo 1489 del Código Civil*, herramienta jurídica que ya no puede emplear por encontrarse trabada la Litis, pero que tal argumento tampoco sería útil pues, *el sostener que la solicitud de pago reclamada en el Punto A.- de su demanda, podría llevarnos a pensar que el contrato de marras no se encuentra terminado, toda vez, que él mismo ha reconocido que la indemnización por mayores gastos generales (artículo 90 D.S 236/2002 V. y U.) tiene una naturaleza distinta a la que en este punto se discute y que no tiene relación alguna con el término del contrato.*





Foja: 1

Entonces, prosigue, la acción indemnizatoria subsidiaria debe ser desestimada siguiendo la suerte de la acción de cumplimiento principal.

Sostiene también que el actor debe acreditar la sumas que pide como daño material, y que el daño moral debe ser desestimado, porque no son responsabilidad del Servicio las relaciones comerciales o mutuos solicitados a terceros ajenos a la relación jurídica por el actor.

**A folio 21**, la demandante viene en evacuar la réplica, remitiéndose a lo ya expuesto en la demanda.

**A folio 23** la demandada viene en evacuar la dúplica, sin añadir nuevos argumentos.

**A folio 31** consta la celebración de la audiencia de conciliación, que no prosperó.

**A folio 32** se recibió la causa a prueba.

**A folio 58** se citó a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que a folio 1 comparece **Germán Nicolás**



Foja: 1

**Blasquez Galaz**, constructor, como representante legal de **CONSTRUCTORA SAN ALFONSO SpA**, deduciendo demanda de indemnización del artículo 90 del Decreto Supremo 236 y de cumplimiento forzado con indemnización de perjuicios, en contra del **SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN METROPOLITANA**, con la finalidad de que: 1) se condene al pago de \$6.893.280 a título de indemnización regulada en el artículo 90 del Decreto Supremo 236, por los aumentos de plazo en la ejecución del contrato de SERVICIO DE HABILITACIÓN DEL SEGUNDO PISO, ALA SUR, EN LAS DEPENDENCIAS DEL SERVIU METROPOLITANO, más intereses corrientes para operaciones reajustables que se devenguen entre la fecha de la mora, o la suma que el tribunal estime; 2) que se declare que la demandada no cumplió íntegra y oportunamente el contrato de suma alzada ya individualizado; 3) que se condene al pago de una indemnización de perjuicios por la suma de \$113.375.123 por concepto de daño emergente, más el interés máximo convencional desde la fecha de la mora, o la suma que este tribunal determine; 4) que se condene a la demandada al pago de una indemnización de \$150.000.000, por concepto de daño moral; 5) que se condene en costas a la parte demandada; y 6) o bien,



Foja: 1

en todo lo anterior, como el tribunal determine conforme a derecho.

**SEGUNDO:** Que la parte demandada contestó la demanda solicitando su rechazo, y se evacuaron los trámites de réplica y dúplica con los fundamentos ya reseñados.

**TERCERO:** Que con el objeto de justificar sus dichos la demandante rindió la siguiente prueba:

**Instrumental**

**A folio 36,** copias digitalizadas de:

1) Informe Técnico Habilitación de Segundo Piso Ala Sur Edificio Serrano de fecha 21 de febrero de 2020.

2) Contrato "SERVICIO DE HABILITACIÓN DEL 2° PISO, ALA SUR, EN LAS DEPENDENCIAS DEL SERVIU METROPOLITANO, UBICADO EN SERRANO 45, COMUNA DE SANTIAGO", celebrado entre Servicio De Vivienda y Urbanización Metropolitana y Constructora San Alfonso SpA, de fecha 23 de diciembre de 2019.

3) Resolución Exenta 5970 de fecha 24 de diciembre del año 2019 del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano.

4) Copia Libro de obras folios 01 y 02.



Foja: 1

5) PRÓRROGA DE CONTRATO HABILITACIÓN DEL 2º PISO ALA SUR DEL EDIFICIO DE CALLE SERRANO 45, SANTIAGO SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN METROPOLITANO Y CONSTRUCTORA SAN ALFONSO SpA, de fecha 17 de abril de 2020.

6) Copia de libro de obras, folio 22.

7) Copia de libro de obras, imagen sin folio y folio 37.

8) Correo electrónico de Luis Flores Garrido a María Villena González y Francisco Poblete Reyes, de fecha 18 de marzo de 2020.

9) Correo electrónico de María Villena González a Nicolás Blasquez Galaz, de fecha 18 de marzo de 2020.

10) Correo electrónico de María Villena González a Nicolás Blasquez Galaz, de fecha 05 de mayo de 2020.

**A folio 44:**

11) Contratos de Trabajo de Adolfo Andrés Angera Fuentes, de Héctor Manuel Soto Arce, de Freddy Cerro Inostroza, de Jesús Miguel Riquelme Araya, de José del Tránsito García Parada, de José Miguel Riquelme Vilma, de Lindor Antonio Céspedes Tapia, de Mario Rubén Jara Fernández, de Oscar Andrés Saldías



**Foja: 1**

Herrera, de Raúl Agustín Castillo Figueroa, de Santiago Montoya Ríos, de Rijkard Pool Zeballos Cabrera, de Segundo Riquelme Vilma, de Raúl Elizardo Pavez Tobar y de José Ignacio Padilla Bórquez.

12) Liquidaciones de sueldo de marzo y abril de 2020 de Adolfo Angera Fuentes y de Segundo Riquelme Vilma, y liquidaciones de sueldo de marzo, abril y mayo de 2020 de Héctor Soto, de Freddy Inostroza, de Jesús Riquelme, de José Riquelme, de Lindor Céspedes, de Mario Jara, de Óscar Saldías, de Raúl Castillo, de Santiago Montoya, de Rijkard Pool, de Raúl Tobar, de Yerko Díaz, de José Padilla y de Germán Blásquez.

13) Comprobante de Pago de Cotizaciones Previsionales y Depósitos de Ahorro Voluntario Fondo de Pensiones, Seguro De Cesantía, APVI, APVC Y Afiliado Voluntario, de los trabajadores de Constructora San Alfonso SpA, correspondiente a los periodos de marzo y abril de 2020.

14) Comprobantes de Pago de Cotizaciones Previsionales y Depósitos de Ahorro Voluntario Fondo de Pensiones, Seguro de Cesantía, APVI, APVC Y Afiliado Voluntario, de los trabajadores de Constructora San Alfonso SpA, correspondiente al



Foja: 1

periodo de abril del año 2020. Correspondiente al Trabajador Nicolás Blasquez Galaz, periodos marzo y abril de 2020.

15) Estados de cuenta de Banco de Chile N° de cuenta 2840051304, perteneciente a Constructora San Alfonso SpA, correspondientes a los periodos desde el 28 de febrero al 31 de marzo de 2020, desde el 31 de marzo al 30 de abril de 2020, y desde el 30 de abril al 29 de mayo de 2020.

**A folio 45:**

16) Informe de Auditoría realizado por Contabilidades y Asesorías JPA Limitada, de fecha 26 de abril de 2022.

17) Copia de reducción a escritura pública de Junta Extraordinaria de Accionistas Constructora San Alfonso SpA, otorgada con fecha 23 de agosto de 2020 en la 25ª Notaría de Santiago, repertorio N°1256-2020.

**Testimonial:**

**A folios 51 y 52,** con fecha 02 de noviembre de 2022, comparecen los siguientes testigos, los que previamente juramentados y libres de tacha, deponen al tenor del auto de prueba de folio 32:

1) **Christian Marcelo Díaz Cornejo,** quien al



Foja: 1

**punto uno**, señala que en 2019 se estaba haciendo una remodelación en el Serviu, en Serrano N°45. La constructora los subcontrató para realizar la climatización.

Repreguntado, señala que las partes del contrato son Constructora San Alfonso y el Serviu, que era una plante libre, sin pintura, sin cielo, sin piso, y la Constructora tenía que habilitarla, dejarla pintada, y con todos los servicios de clima, luces y baño. Quedó habilitada en un 100%.

Contrainterrogado, señala que trabajó desde el inicio al término de la obra, bajo subcontrato.

**Al punto dos**, desconoce los términos del contrato ni si el Serviu pagó a la Constructora.

**Al punto tres**, relata que en un momento de la obra les solicitaron retirarse, y que en el tiempo que no iban a estar trabajando se les iban a pagar igual los sueldos, lo que al parecer no sucedió, porque San Alfonso le pagó todo.

Repreguntado, explica que se les pidió retirarse porque el Serviu lo había dispuesto por causa de la pandemia. Sucedió en la semana en que decretaron cuarentena en Santiago, el retiro de la obra duro casi dos meses. El Serviu no pagó.



Foja: 1

**Al punto cuatro,** señala que hay un monto que la Constructora *asumió por el tema de los sueldos para cubrir a nosotros,* por esos dos meses que estuvimos paralizados.

Repreguntado, afirma que el monto fue de aproximadamente 48 millones y fracción.

Contrainterrogado, afirma que le consta por una conversación informal con el Constructor de San Alfonso.

**2) Héctor Eugenio Vega Morales,** quien al **punto uno,** señala que se estaba trabajando en el ala Sur, segundo piso del edificio Serrano 45 del Serviu. Las partes del contrato eran Constructora San Alfonso SpA y el Serviu Metropolitano.

**Al punto dos,** expone que no se dio cumplimiento, el Serviu ordenó paralizar las obras mediante un oficio, por causa de la pandemia, por lo que hay un perjuicio.

Repreguntado, indica que la paralización duró de un mes y medio a dos meses. Explica que hay un perjuicio porque en toda obra fiscal, al prolongarse ésta, se deben hacer reestudios de costos.

**Al punto tres,** expone que se generó un perjuicio al demandante, quien incurrió en mayores





Foja: 1

costos, por lo que solicitó créditos para pagar materiales a empresas y a sus subcontratos.

Repreguntado, indica que tuvo que pedir créditos por aproximadamente \$50.000.000.-, lo que le consta por conversaciones con Jesús Riquelme.

Contrainterrogado, afirma que vio la obra cuando hacía sus trámites en el Serviu.

**Al punto 4,** desconoce el margen de utilidad de la empresa.

**CUARTO:** Que, la parte demandada se valió de los siguientes medios probatorios en autos:

**Instrumental**

**A folio 15:**

1) Copias de Resoluciones Exentas del Serviu Metropolitano N°1566 del 05 de julio de 2019, y N°s 4663 y 4664, ambas del 30 de agosto de 2013.

**A folio 45:**

2) Copia de Resolución Exenta del Director del Serviu Metropolitano N° 1327 de fecha 25 de marzo de 2019.

3) Copia de Resolución Exenta del Director del Serviu Metropolitano N°5970, de fecha 24 de diciembre de 2019.



Foja: 1

**Testimonial:**

**A folio 53**, con fecha 10 de noviembre de 2022, comparecen los siguientes testigos, los que previamente juramentados y libres de tacha, deponen al tenor del auto de prueba de folio 32:

1) **José Ladrón de Guevara Benítez**, quien al **punto uno**, señala que existe un contrato suscrito entre Constructora San Alfonso y el SERVIU Metropolitano, que tenía como estipulaciones el servicio de habilitación del segundo piso del edificio ubicado en Serrano N° 45 Comuna de Santiago, de SERVIU Metropolitano. El plazo era de 120 días corridos a contar de la fecha de suscripción del señalado contrato. El valor de este contrato era sobre trescientos millones de pesos aproximadamente. Recuerda que la normativa era la reglamentación de la Ley de Contrataciones y Compras Públicas. Le consta porque se desempeña en la subdirección jurídica del Serviu y tuvo acceso al contrato, que revisaron en alguna oportunidad.

Repreguntado, afirma que no procedía el pago de mayores gastos generales por suspensión o prórroga. Existió una, pero ésta sólo consideraba un aumento del plazo del contrato. Se prorrogó por causa del



Foja: 1

COVID-19, que fue declarada no sólo como emergencia, sino que como fuerza mayor. Se contrató bajo la modalidad de trato directo.

**Al punto dos,** afirma que (la demandada) dio debido cumplimiento a las estipulaciones del contrato, debido que la única prórroga que hubo se debió a un caso fortuito o fuerza mayor, que escapaba a las partes. Las autoridades impartieron instrucciones vía Ministerio de Salud y Contraloría General de la República, lo que le consta porque las normas dictadas fueron de público conocimiento.

Repreguntado, señala que hubo recepción final conforme de la obra por el Serviu, lo que indica que el proveedor cumplió con sus obligaciones, por lo que el Serviu procedió al pago de los servicios contratados.

**Al punto cinco,** expone que existió un caso fortuito o fuerza mayor, la pandemia de COVID-19, que obligó al gobierno a optar por medidas de prevención a fin de resguardar tanto la salud pública de todos sus habitantes. Eso se tradujo en diversas normas dictadas por el Ministerio De Salud y Contraloría General de La República, y también Por SERVIU Metropolitano, para proteger a las personas



Foja: 1

bajo su dependencia.

Repreguntado, sostiene que no fue imputable al Serviu, pues la pandemia excedía sus facultades y era imposible de resistir para cualquier gobierno.

2) **Rosa del Pilar Hernández Díaz**, quien al **punto uno**, señala que se celebró un contrato entre Constructora San Alfonso SpA y el Serviu Metropolitano, que consistía en la habilitación de un segundo piso de dependencias de SERVIU en calle Serrano 45 de la comuna de Santiago. El plazo era de 120 días corridos desde la suscripción, el valor de aproximadamente \$306.000.000.-. El trato directo se reguló por la Ley 19.886 y el Decreto 250 de Compras Públicas. Le consta porque es funcionaria del Serviu y fue parte dele quipo que lo revisó.

Repreguntada, sostiene que no proceden indemnización ni pago de mayores gastos porque se contrató vía trato directo, conforme con la Ley 19.886.

**Al punto dos**, expone que se dio cabal cumplimiento al contrato por las partes. Las obras se encuentran terminadas, con recepción final, por ambas partes y el Serviu nada le debe a la demandante.



Foja: 1

**Al punto cinco,** expone que existió caso fortuito o fuerza mayor, ya que la prórroga del plazo se debió a la pandemia de COVID, lo que es de público conocimiento.

Repreguntada, afirma que la prórroga no es imputable al Serviu.

**QUINTO:** Que la prueba allegada al proceso, así como los hechos en que las partes se encuentran contestes, permite tener por acreditado:

1)Que, con fecha 23 de diciembre de 2019, se celebró entre el Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano y Constructora San Alfonso Spa, un contrato denominado *Servicio de habilitación del 2º piso, Ala Sur, en las dependencias del SERVIU Metropolitano, ubicado en Serrano 45, comuna de Santiago.*

En la cláusula segundo, se fijó como objeto del contrato el *reacondicionar todo el espacio siniestrado (segundo piso ala sur de las dependencias del Serviu ubicado en Serrano N°45, comuna de Santiago) a fin de restablecer el normal funcionamiento de las labores de los funcionarios que se desempeñan en la Subdirección de Pavimentación y Obras Viales, en conformidad con los*



Foja: 1

*Términos de Referencia, y a la oferta efectuada por el proveedor.*

En la cláusula tercera se fijó un precio total de \$306.368.109.-.

En la cláusula cuarta se fijó un plazo de 120 días corridos para la realización del servicio, contados desde la firma del acta de entrega del terreno, a lo que se añade que *Excepcionalmente, podrá contemplarse prórroga del contrato, por una sola vez, y por un período igual o menor al contratado, siempre que no sea por causa imputable al proveedor, se disponga de la partida presupuestaria correspondiente mediante informe fundado del referente Técnico del Convenio, a través del cual se expresen las razones técnicas que justifiquen la prórroga de la vigencia del contrato, debiendo siempre concurrir como fundamento, las necesidades del Servicio y el interés general.*

En la cláusula octava se estableció que *Las modificaciones al contrato podrán efectuarse solamente en los casos establecidos en el art. 13 de la Ley 19.886 de Compras Públicas, en especial por las letras a) y e) ; y en el art . 77 del Reglamento de Compras D. S. 250/2004, en especial por las*



Foja: 1

*causales establecidas en los numerales 1 y 6, previo requerimiento fundado del referente técnico de SERVIU Metropolitano y siempre que dicha solicitud se sustente en las necesidades del Servicio. Estas modificaciones no podrán alterar la naturaleza y objeto del contrato ni podrá aumentar se o disminuirse el monto de éste, más allá de un 20% del monto originalmente pactado. Cualquier modificación, que se realice al contrato, estará sujeta al mismo trámite de aprobación que el contrato original.*

2) Que, encontrándose las obras en ejecución, por disposición del Serviu fundada en la crisis sanitaria provocada por la Pandemia de Covid-19, las obras se paralizaron por 45 días, entre el 23 de marzo y el 07 de mayo de 2020.

3) Que las obras fueron recibidas a satisfacción del Serviu Metropolitano, y se pagó el precio convenido en el contrato.

**i.- En cuanto a la acción de indemnización por aumento de plazo**

**SEXTO:** Que la acción que el actor funda en el artículo 90 del Decreto Supremo N° 236/2002,



Foja: 1

requiere, primeramente, determinar si el contrato que motiva el juicio se encuentra regido por dicha norma.

La demandada controvierte su aplicabilidad, señalando que el contrato indica regirse por la Ley N°19.886 y por el Decreto N°240/2004 (sic).

Sin embargo, especialmente tratándose de la aplicación de normas de orden público, la normativa aplicable no es aquélla que elijan las partes, sino la que se deduzca del objeto del contrato, esto es, las obligaciones que emanan del mismo.

**SÉPTIMO:** Que el Decreto 250/2004, que Aprueba Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios establece en su artículo 2 N° 10 que el Contrato de Servicios es *aquel mediante el cual las entidades de la Administración del Estado encomiendan a una persona natural o jurídica la ejecución de tareas, actividades o la elaboración de productos intangibles. Un contrato será considerado igualmente de servicios cuando el valor de los bienes que pudiese contener sean inferiores al cincuenta por ciento del valor total o estimado del contrato.*





Foja: 1

En los número siguientes, se clasifican los servicios en generales, aquéllos que no requieren un desarrollo intelectual intensivo en su ejecución, de carácter estándar, rutinario o de común conocimiento; en personales, los que en su ejecución demandan un intensivo desarrollo; y en habituales, los que se requieren en forma permanente y que utilizan personal de manera intensiva y directa para la prestación de lo requerido por la entidad licitante, tales como servicios de aseo, seguridad, alimentación, soporte telefónico, mantención de jardines, extracción de residuos, entre otros.

Por su parte, el Decreto Supremo 236/2002, que *Aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización*, establece en su artículo 1 que *El presente decreto regulará y formará parte integrante de los contratos de construcción de obras que celebren los Servicios de Vivienda y Urbanización, en adelante Serviu.*

A su vez, el artículo 3 del mismo cuerpo reglamentario establece que *Los contratos de ejecución de obras que celebren los Serviu, se adjudicarán por propuestas públicas, llamando a los contratistas inscritos en el Renac, en los*



Foja: 1

registros, especialidades y categorías que corresponda. Sin embargo, excepcionalmente podrán contratarse obras, indistintamente, por trato directo o por propuesta privada, en los casos siguientes:

d) Cuando se trate de obras de conservación, reparación o mejoramiento habituales de inmuebles de propiedad del Serviu respectivo. Cuando el monto del contrato exceda de 3.000 U.F., para contratar por trato directo se requerirá autorización previa, por escrito, del Ministro o del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo (...).

En consecuencia, habiendo asumido la demandante la obligación de ejecutar una obra material consistente en reparar un inmueble de propiedad del Serviu Metropolitano, cabe aplicar el Decreto Supremo 236/2002.

**OCTAVO:** Que, asimismo, las bases del contrato, por su propia naturaleza, contemplan la existencia de una Inspección Técnica de Obra, cuyas atribuciones y funcionamiento se encuentran reguladas en el Título IV del Decreto Supremo 236/2002.

Por el contrario, no se hace referencia a la



Foja: 1

Inspección Técnica de Obra en el Decreto Supremo 250/2004, que regula los contratos de suministro de bienes inmuebles o de prestación de servicios de carácter intangible.

**NOVENO:** Que, sin embargo, la disposición invocada por la demandante se circunscribe a los aumentos del plazo del contrato que ocurrieren en virtud de la aplicación de los artículos 92, 88 y 89 de este reglamento, lo que requiere examinar si el aumento de plazo se corresponde con alguna de dichas hipótesis.

Así, los artículos 92 y 88 no dicen relación con los hechos del juicio, pues el primero se refiere a aumentos de plazo provenientes de la falta de entrega del terreno o de los planos (que) no fuese imputable al contratista; mientras que el segundo contempla el caso de que el Serviu ordenare el empleo de materiales de su propiedad, y si, a su juicio, la entrega de éstos ocasionare atrasos en la terminación de las obras.

**DÉCIMO:** Que los hechos acreditados en el juicio pueden subsumirse en la hipótesis del artículo 89 del Decreto Supremo 236/2002, que establece que Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, el



Foja: 1

*Serviu podrá, por resolución fundada, modificar el programa de trabajo e indemnizará al contratista, en la forma que se establece en el artículo siguiente, por los perjuicios que esta medida pueda ocasionarle, si dichas modificaciones no se deben a incumplimiento por parte del contratista.*

En efecto, se encuentran contestes las partes en que una circunstancia especial y no imputable a ninguna de las partes, la pandemia de Covid 19, el Serviu dispuso la suspensión de la faena por 45 días.

**DÉCIMO PRIMERO:** Que si bien es público y notorio que el acaecimiento de la pandemia de Covid-19 revestía las características del caso fortuito, esto es, exterioridad, imprevisibilidad e irresistibilidad, para ser alegado como defensa tales condiciones deben predicarse en relación con la obligación respecto de la cual el deudor pretende excusarse.

En la especie, si bien es evidente el acierto por parte del Serviu en disponer la suspensión de las obras, no se observa cómo la pandemia de Covid-19 le hubiera podido imposibilitar pagar la indemnización prevista en el artículo 90 del Decreto



**DÉCIMO SEGUNDO:** Que, por otra parte, el nacimiento de la obligación no se encuentra sujeto a que la modificación del programa de trabajo provenga de culpa o falta de servicio del Serviu, sino a que tal modificación sea aconsejable y que no medie culpa del contratista.

Por consiguiente, alegar que la excepcionalidad de las circunstancias aconsejaba la recalendarización no puede invocarse exitosamente como argumento para sostener la inaplicabilidad del artículo 90, pues tal especialidad es precisamente un presupuesto de la norma en que se funda la acción interpuesta, la que, en consecuencia, será acogida.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, la disposición ya repetidamente invocada establece una indemnización de un 0,5 por mil del monto inicial del contrato por cada día de mayor plazo, actualizado conforme con el valor de la Unidad de Fomento al tiempo del pago, por lo que, ascendiendo el monto inicial del contrato a \$306.368.019.-, y habiéndose encontrado paralizadas las obras durante 45 días, se condenará a la demandada al pago de la cantidad de \$6.893.280.-, reajustada conforme con la variación



Foja: 1

que experimente la Unidad de Fomento entre el 23 de diciembre de 2019, época de la suscripción del contrato, y la época del pago efectivo, y con los intereses corrientes para operaciones reajustables que se devenguen desde que esta sentencia cause ejecutoria, y hasta la solución de la obligación.

**ii. En cuanto a la acción de cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios**

**DÉCIMO CUARTO:** Que, señala el actor como incumplida la *obligación de pagar los costos del período de paralización de la obra, conforme prometió la demandada* (página 15 del libelo).

De ello se manifiesta la impertinencia de la defensa de la demandada, al señalar que el contrato se encuentra íntegramente cumplido por haberse recibido las obras y pagado el precio convenido, toda vez que lo se denuncia incumplido es una obligación diversa.

**DÉCIMO QUINTO:** Que se afirma también en el libelo (párrafo 17), que la indemnización basada en el artículo 90 del Decreto Supremo 236 no tiene vinculación con la acción de cumplimiento de forzado



Foja: 1

del contrato, y cita a continuación un fallo de la Excma. Corte Suprema (Rol 7446-2011) que, contrariamente a lo que se pretende, discurre por un orden de ideas diverso al que propone el actor.

En efecto, plantea el fallo citado la independencia entre el supuesto de hecho de la disposición (el ejercicio de la potestad de recalendarizar las obras por parte del Serviu), y un eventual incumplimiento del contratista que conlleve como sanción la terminación del contrato.

Por el contrario, en la especie se atribuyen al mismo hecho dos consecuencias jurídicas diversas; la obligación de indemnizar que emana del artículo 90 del Decreto Supremo 236 y, por otra parte la de reembolsar los mayores costos que efectivamente se hayan producido, que funda el actor en la naturaleza misma del contrato a suma alzada.

**DÉCIMO SEXTO:** Que, asimismo, yerra el actor al negar que la obligación impuesta al Serviu por el artículo 90 del Decreto Supremo 236 tenga carácter contractual.

Resulta pertinente citar lo dicho en doctrina en cuanto a que *"lo que determina la responsabilidad es el incumplimiento de aquel proyecto conductual*



Foja: 1

que denominamos obligación, y que consiste, a nuestro juicio, en un deber de conducta tipificado en la ley. Dicho de otro modo, toda obligación impone siempre al sujeto pasivo o deudor el deber de comportarse de una manera determinada en beneficio del sujeto activo o pretensor. Este comportamiento está descrito en la ley, la cual establece, en cada caso, precisamente qué grado de diligencia, cuidado y atención debe poner el deudor en el desarrollo de la conducta a que se ha comprometido o le es exigible. La responsabilidad surge, entonces, cuando no se despliega la conducta que se ha asumido o no se pone en ella el deber de cuidado, diligencia y atención que establece la ley.

(...) En un plano teórico podemos afirmar (...) que la norma consagra una hipótesis (descriptiva), de la cual se sigue una consecuencia (prescriptiva). La obligación consiste, precisamente, en la realización de aquella consecuencia ordenada en la ley y que se hace exigible luego de la producción del hecho descrito como hipótesis (el cual corresponde a la fuente de la obligación) De aquí que no sea errado afirmar que, en definitiva, la única fuente de la obligación es la ley, porque en ella se describe la hipótesis (el delito, el





Foja: 1

cuasidelito, el contrato, el cuasicontrato, la declaración unilateral de voluntad) y en ella se prescribe la conducta que debe desplegarse (la obligación) (...)

Por último, si la obligación incumplida se encuentra directamente impuesta en la ley en términos explícitos y formales, nos encontraremos ante la responsabilidad legal. Aclaremos desde ya, que cuando la ley opera en el silencio de las partes (leyes supletorias de la voluntad) no nos encontramos con obligaciones legales, sino contractuales. Ello porque presumiéndose el conocimiento de la ley, la circunstancia de celebrar un acto o contrato guardándose silencio respecto de alguno de sus efectos, implica aceptar anticipada y tácitamente que en aquella materia rige plenamente el mandato normativo. Todo contrato se celebra en el marco del ordenamiento jurídico, por lo mismo, a éste corresponde llenar los vacíos y solucionar las imprecisiones en que incurren las partes al darle vida" (Pablo Rodríguez Grez. Responsabilidad Contractual, pp. 9 y ss.

Así, dado que la disposición que establece la obligación analizada en los motivos precedentes forma parte del ordenamiento jurídico, la falta de



Foja: 1

pago importa en sí mismo un incumplimiento contractual.

De ese modo, resta analizar si, como pretende el actor, se encuentra obligado el Serviu a asumir la totalidad de los costos provenientes de la recalendarización de las obras, por sobre el monto que se liquidare en conformidad con el artículo 90 del Decreto Supremo 236/2002.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que asignando el sistema jurídico una consecuencia específica y concreta al ejercicio de la potestad de recalendarizar las obras, deben descartarse los argumentos que extrae el actor de la definición de la naturaleza del contrato a suma alzada para entender que el marco normativo obligaría al Serviu en términos más amplios que el artículo 90 del Decreto Supremo 236/2002, pues ello haría superflua la norma invocada.

Asimismo, dado el tenor de la disposición y la claridad de la norma en análisis, no puede su odiosidad para el actor ser tomada en cuenta para ampliar su interpretación.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que, descartado que el ordenamiento jurídico contemple una obligación en



Foja: 1

los términos amplios que se demandan, resta examinar si la misma se ha originado de la voluntad manifestada por las partes.

Si bien la cláusula cuarta del contrato, contempla que *se disponga la partida presupuestaria correspondiente* para prorrogar el contrato, nada se explica respecto de qué comprendería tal partida presupuestaria, por lo que ésta debe determinarse mediante la fórmula ya desarrollada en el motivo décimo tercero, que se contiene en el ordenamiento jurídico subyacente al contrato.

**DÉCIMO NOVENO:** Que si bien consta en el proceso (folio 36) que los correos electrónicos por medio de los cuales se ordenó la paralización de las obras indicaban que *los costos asociados a la paralización de la obra serán responsabilidad del SERVIU Metropolitano*, no se deduce de ello una modificación en la forma de calcular dichos costos que se encuentra establecida por vía reglamentaria ni, aunque tal fuera el caso, obligarían tales declaraciones al Serviu, toda vez que, como se establece en la cláusula octava, las modificaciones requiere el mismo trámite de aprobación que el contrato original.



Foja: 1

**VIGÉSIMO:** Que, en consecuencia, si bien existe un incumplimiento contractual, éste se limita a la falta de pago de la cantidad señalada en el motivo décimo tercero.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que, establecido el incumplimiento, y habiendo optado el actor por pedir su cumplimiento forzado con indemnización de perjuicios, cabe examinar la procedencia de indemnizar cada uno de los conceptos que se piden.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que por concepto de daño emergente pide el actor la cantidad de \$113.375123.- equivalente a los costos por el mayor plazo o sobreestadía que debió soportar.

Sin embargo, para justificar contablemente ese monto acompaña el actor (folio 45) una copia digitalizada de una auditoría a la que, por haber sido suscrita por terceros que no comparecieron como testigos a reconocer el documento, no puede asignársele mérito probatorio.

Sin perjuicio de no haberse cumplido al respecto con la carga procesal establecida en el artículo 1698 del Código Civil, tales gastos no dicen relación de causalidad con el incumplimiento acreditado en el juicio, por montos superiores a la



Foja: 1

obligación incumplida, pues, aun en el caso de haberse pagado oportunamente la cantidad de \$6.893.280.- reajustada conforme con la variación de la Unidad de Fomento, los costos adicionales se hubieran producido igualmente.

Asimismo, ya habiéndose establecido la obligación de pagar dicha cantidad en virtud del artículo 90 del Decreto Supremo 236/2002, que forma parte de la normativa que rige el contrato, resulta improcedente condenar nuevamente al actor a pagar la misma suma por concepto de daño emergente, por lo que la partida será desestimada.

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que, en cuanto al daño extrapatrimonial, si bien la doctrina y jurisprudencia modernas reconocen la procedencia de indemnizarlo se infiere a una persona jurídica, la demandante no ha cumplido con la carga procesal establecida en el artículo 1698 del Código Civil, al no haber justificado su concurrencia.

En efecto, se señala (página 17) como constitutivo de daño moral el habersele inferido una *lesión o deterioro de la imagen, fama y prestigio (...) frente a los incumplimientos en que tuvo que incurrir por la falta de pago de la demandada, que*



Foja: 1

*generó un efecto en cadena muy perjudicial para la empresa.*

Sin embargo, de tanto de la documentación que acompaña la propia demandante como de las declaraciones testimoniales de sus subcontratistas se desprende que, por el contrario, sí pudo cumplir con sus obligaciones, de modo que no se observa que haya sufrido un desprestigio.

Finalmente, el enorme estrés que debieron asumir ejecutivos y dueños de la compañía no puede ser invocado como un hecho constitutivo de daño extrapatrimonial de la empresa demandante, que es una persona distinta.

Por dichas consideraciones, se desestimará también esta partida.

**VIGÉSIMO CUARTO:** Que la prueba no analizada ni ponderada en nada altera lo anteriormente razonado.

Por estas consideraciones y teniendo presente, además, lo previsto en los artículos 1437 y siguientes, 1547, 1698 y 1793 y siguientes del Código de Civil; 144, 170 y 254 del Código de Procedimiento Civil, y el Decreto Supremo N°236/2002, **SE DECLARA:**

I. Que **se acoge** la demanda interpuesta en lo



**C-2685-2021**

**Foja: 1**

principal de folio 1, únicamente en cuanto se declara:

- Que la demandada incumplió el contrato de suma alzada denominado SERVICIO DE HABILITACIÓN DEL 2° PISO, ALA SUR, EN LAS DEPENDENCIAS DEL SERVIU METROPOLITANO, UBICADO EN SERRANO 45, COMUNA DE SANTIAGO.

- Que se condena al Serviu Metropolitano a pagar a la demandante la cantidad de \$6.893.280.-, en la forma señalada en el motivo décimo tercero.

- Que se desestima la demanda en lo demás.

II. Que no se condena en costas a la demandada, por no haber sido totalmente vencida.

**Roll N° 2685-2021**

**REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE**

**PRONUNCIADA POR WILSON RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JUEZ  
SUPLENTE DEL PRIMER JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.**

rfu



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GSWXXGXCXLT

C-2685-2021

**Foja: 1**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, treinta y uno de Julio de dos mil veintitrés**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GSWXXGXCXLT